

GESTIÓN COLECTIVA DEL PAISAJE EN BOGOTÁ: ¿UNA APUESTA CIUDADANA EN CONTRACORRIENTE?

NATALY ALEXANDRA DÍAZ CRUZ

“Las ciudades son sistemas frágiles en múltiples dimensiones. En términos ecológicos su equilibrio depende de la delicada conexión entre ecosistemas dispersos que permitan garantizar a diversas poblaciones, tanto humanas como no humanas, refugio, abastecimiento, aire y agua limpios. En ese sentido, la existencia de vida silvestre en una ciudad indica, en alguna medida, el éxito de la organización territorial del espacio urbano y una buena calidad ambiental para sus habitantes.”

Quizá por ello, favorecer el aumento de prácticas de agricultura urbana y de renaturalización de áreas ecológicas en las ciudades se ha venido consolidando como tendencia mundial. Los habitantes de zonas urbanas son cada vez más conscientes de su papel en el mantenimiento del equilibrio ecológico de estos entornos, y participan no sólo como vigías de áreas ecológicas urbanas, sino además en procesos de diseño y co-creación liderados por instituciones públicas y privadas. Sin embargo, como para toda regla hay su excepción. En Bogotá, la capital de Colombia, la participación ciudadana se ha

tratado durante la última administración como una molestia, más que como un potencial para otorgarle a los ciudadanos la posibilidad de gestionar el paisaje de su ciudad.

El proceso de urbanización acelerada de la mayoría de las ciudades capitales de Latinoamérica ha dado paso a la creación de un paisaje de muros, vías, y edificios hacinados, en el que el equilibrio ambiental ocupa uno de los lugares menos representativos. Para el caso de Bogotá, la fragmentación y desaparición de los ecosistemas de humedal y sabana que la caracterizaron hasta entrada la segunda mitad del siglo XX ha generado la desaparición de su biodiversidad

y el aumento de problemas ambientales. Los topónimos de áreas urbanas como La Conejera, El Lago o La Alquería, dan cuenta de la existencia pasada de un paisaje con una presencia variada de elementos naturales. Encontrar mamíferos de porte pequeño y mediano, así como aves migratorias e insectos múltiples en espacios cotidianos de la ciudad como parques de barrio y orillas de ríos, es un recuerdo que, en la actualidad, se reduce a algunas especies de aves y roedores que se pueden contar con los dedos de una mano.

Según el *Reporte de Estado y Tendencias de la Biodiversidad Continental de Colombia (Bio 2017)*, las poblaciones de aves de Bogotá y la sabana están reduciéndose a ritmos acelerados a causa de la desaparición de sus hábitats y de su migración hacia zonas más altas por factores de cambio climático. Humedales, áreas ecológicas, bosques, potreros y zonas de ronda de ríos son paisajes en extinción en Bogotá dados los procesos de endurecimiento del suelo y de transformación de su uso para proyectos de vivienda o recreación activa que reemplazan suelo natural por materiales artificiales. Estos procesos, sumados a la disminución de la cantidad de árboles de la ciudad, por decisiones administrativas, han generado que mientras las áreas naturales urbanas se reducen, el nivel de ruido, de contaminación del aire y de aumento de la temperatura por el efecto de islas de calor aumente en la capital de Colombia.

El Índice de Árboles por Habitante-APH de la secretaría Distrital de Ambiente afirma que en Bogotá existe un árbol por cada siete personas, cuando la Organización mundial de la Salud indica que se debe tener al menos un árbol por cada tres habitantes. Así como nueve metros cuadrados de zonas verdes por habitante, aunque los bogotanos solo cuentan con 1,3 metros cuadrados. Asimismo, el proyecto de Acuerdo No. 065 de 2008 llama la atención sobre la desproporción de árboles por habitante en Bogotá en comparación con ciudades como México, Madrid o París. El evidente déficit de elementos para la calidad ambiental en Bogotá, las decisiones administrativas que la alcaldía ha tomado en contra de la sostenibilidad ambiental de la ciudad, sumado a la ausencia de mecanismos efectivos para la toma de decisiones ciudadanas frente al paisaje urbano, llevaron a múltiples colectivos ciudadanos a congregarse desde el 2017 en “La Marcha de los árboles”. Un movimiento de apoyo cívico que defiende la necesidad de justicia ambiental en Bogotá

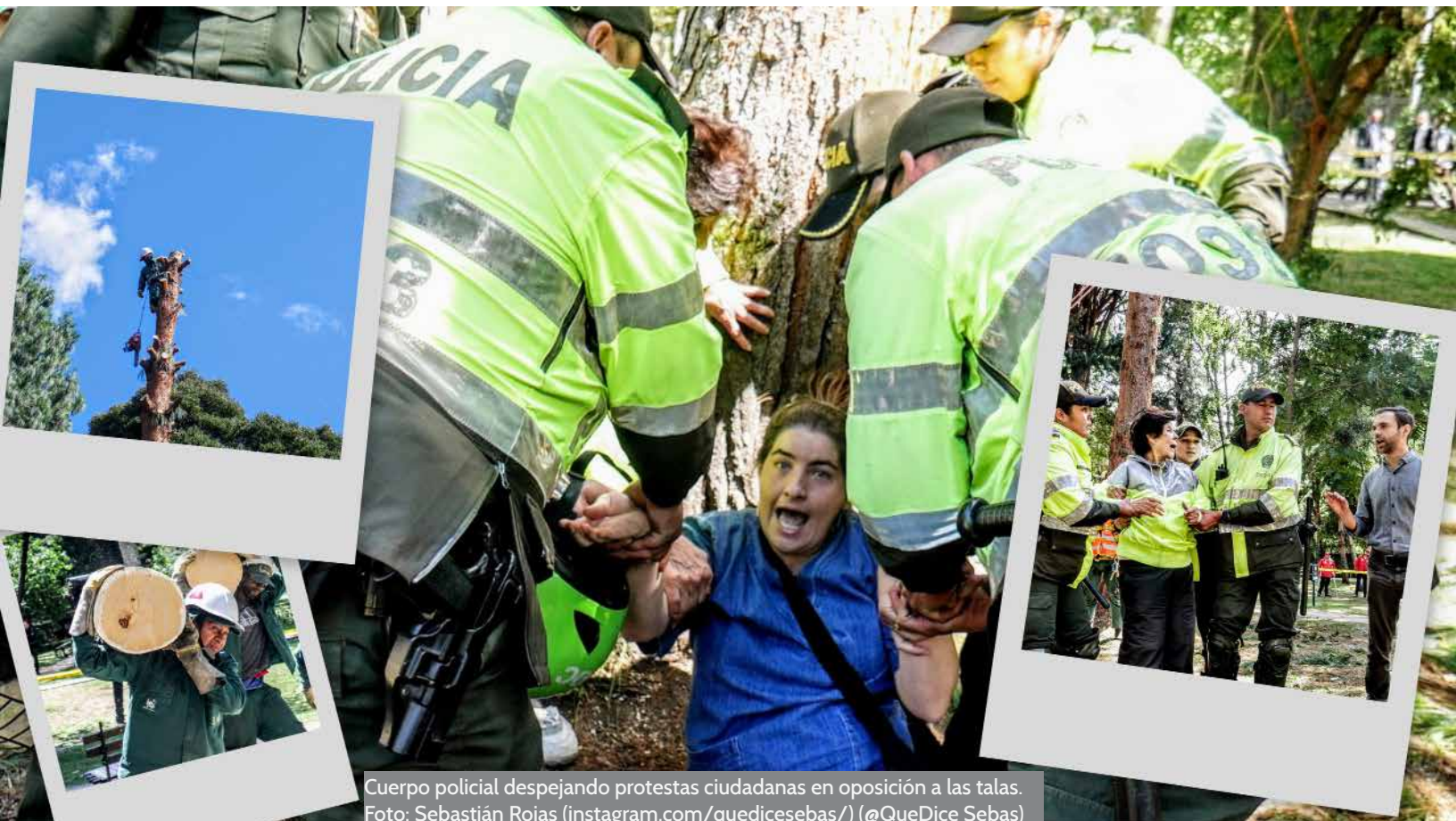
Esta realidad y las decisiones que sobre la estructura ecológica principal y el manejo de recursos ha planteado implementar la administración distrital desde el 2016 han catapultado la organización ciudadana y la exigencia de participación en la toma de decisiones por parte de las comunidades locales. La ciudadanía bogotana ha sido tradicionalmente



Marcha en contra de talas masivas en Bogotá. Foto: Sebastián Rojas (instagram.com/quedicesebas/) (@QueDice Sebas)

tachada de poco cívica, así como aislada de las decisiones sobre su ciudad. Sin embargo, las determinaciones de la alcaldía sobre la tala de 38 000 árboles, la reducción de las más de 20 especies arbóreas de la ciudad a sólo dos por consideraciones paisajísticas estéticas, así como el reemplazo de los pastos naturales por suelos sintéticos, y el favorecimiento de soluciones de movilidad y vivienda que no consideran la conectividad ecológica, han llevado a varios grupos ciudadanos a trabajar con la intención de incidir en las políticas públicas relacionadas con la construcción del paisaje común. Los bogotanos se han unido teniendo como móvil a los árboles. Parques de barrio, bosques urbanos, senderos, quebradas y separadores verdes han sido el escenario tanto para defender el derecho a un paisaje urbano donde exista la posibilidad de encontrar equilibrio ambiental como para exigir el derecho de los ciudadanos a ser tenidos en cuenta en la planeación y transformación de su paisaje, apostando por una gestión colectiva. Los miles de miembros de “La marcha” (Sembradores Van Der Hammen, Bosque San Carlos, Bosque Bavaria, Cumbre Urbana, Amigos de los cerros, Defendamos la séptima, y muchos otros) son ante

todo ciudadanos comprometidos con la construcción de un paisaje urbano del cual se sientan parte. Su defensa de un ambiente de calidad y su búsqueda de participación mediante estrategias administrativas, judiciales, y cívicas, ha obtenido respuesta violenta por parte del estado en cabeza de la alcaldía mayor de Bogotá. Institución que ha utilizado escuadrones móviles antidisturbios (ESMAD) o fuerza policial fuertemente armada en varias ocasiones por oponerse a talas o al endurecimiento de las zonas ecológicas en sus localidades, negando a los habitantes la oportunidad de gestionar de manera colectiva el paisaje de su ciudad. Las determinaciones que la urbanización moderna, el modelo neoliberal de desarrollo que solo ve la naturaleza como mercancía, y la alcaldía de Bogotá en su periodo 2016- 2020 defienden, tienen efectos devastadores para la ciudad y sus habitantes. Polinizadores como abejas, mariposas y aves, así como pequeños mamíferos, ven amenazadas su coexistencia en la ciudad por la transformación de suelos blandos a duros y la desaparición de zonas arborizadas. Al tiempo que las enfermedades respiratorias y de la piel aumentan. La capacidad de infiltración del agua disminuye, así como los



Cuerpo policial despejando protestas ciudadanas en oposición a las talas.
Foto: Sebastián Rojas ([instagram.com/quedicesebas/](https://www.instagram.com/quedicesebas/)) (@QueDice Sebas)

reservorios de agua subterránea, a la vez que aumenta el riesgo de inundaciones, afectando la resiliencia de la ciudad ante el cambio climático. Además, de manera general la percepción negativa del paisaje aumenta, lo cual puede incrementar problemas asociados a la depresión. El Observatorio Ambiental de Bogotá menciona que “una mayor relación de árboles per cápita es más favorable ambientalmente para las ciudades, ya que el arbolado urbano presta diversos servicios ambientales dentro de los cuales se destaca la captación de dióxido de carbono, reducción de contaminantes atmosféricos, regulación de la temperatura, aumento de la biodiversidad, control de inundaciones, mejoramiento de la salud mental y física entre otros” (<https://oab.ambientebogota.gov.co/indicadores/?id=85&v=l>)

Las ciudades que han escuchado atentamente las necesidades y expectativas de sus habitantes han logrado trabajar de la mano con los ciudadanos para construir ciudades altamente sostenibles y creativas con justicia ambiental, donde el compromiso se establece como una reciprocidad y no como una carga. Las instituciones pueden aprender de casos exitosos de restauración ecológica de áreas urbanas en ciudades como Chicago (The Field Museum) o Edimburgo (Royal Botanical Garden) donde la recuperación de áreas naturales urbanas y plantas nativas ha traído consecuencias positivas para el

aumento de polinizadores, el mejoramiento de la calidad de aire, el fortalecimiento de espacios eco-recreativos y fundamentalmente el bienestar sicosocial de los habitantes de áreas urbanas, quienes se vuelven embajadores del paisaje al ejercer la gestión colectiva de su ciudad mediante la participación en los proyectos liderados desde la institucionalidad.

Los habitantes de las ciudades tenemos derecho a participar efectivamente en la toma de decisiones sobre la ciudad que habitamos. Tenemos derecho a construir la ciudad de manera colectiva y a exigir un paisaje en el que sea posible la justicia ambiental. Para ello, los habitantes de las ciudades, y en especial los bogotanos, necesitamos instituciones y gobernantes que confíen en sus ciudadanos, que vayan de la mano en la construcción de ciudades en las que habitar sea posible, que sean defensores y no agresores de iniciativas que propenden por la creación de espacios de encuentro, identificación y apropiación. La marcha de los árboles marca el inicio de una transformación ciudadana en la capital de Colombia. Los bogotanos no pueden seguir siendo tachados de indiferentes ante su ciudad, y aunque la apuesta por un paisaje autogestionado parezca ir contra la corriente de las instituciones encargadas de la planeación y administración distrital, la iniciativa es colectiva, se replica en todo el territorio, y se está fortaleciendo.

NOTA SOBRE LA AUTORA

Nataly Díaz Cruz, docente e investigadora en paisaje urbano, patrimonio ambiental y cultural. Hace parte del colectivo “Defendamos la séptima” que promueve opciones de movilidad amigables con el patrimonio socioambiental de la ciudad. Es investigadora líder del grupo Espacio Tecnología e Investigación ESTEPA en la Universidad Nacional de Colombia.